

MC EVOY, Carmen, 2013, *En pos de la República. Ensayos de historia política y cultural*, Lima, Centro de Estudios Bicentenario, Municipalidad de Lima Metropolitana y Asociación Educacional Antonio Raimondi. 398 pp.

Este libro está compuesto por diez ensayos conectados en el tiempo y en los temas. Algunos de ellos publicados antes, pero ahora, en un interesante ejercicio de método, dialogan en el marco de un largo siglo XIX que se inicia en la década de 1820 y concluye al principio del siglo pasado. En ese trajinado siglo, Mc Evoy busca la República que aún no aporta a su madurez y se desliga del orden virreinal, a veces de manera tensa y, no en pocas ocasiones, en forma trágica. El orden republicano es el sujeto y el hilo conductor de este sugerente libro sobre el discurso político, las prácticas culturales y las coordinadas biográficas de políticos e intelectuales.

Un eje que agrupa varios ensayos es el de la ciudad letrada, *locus* de los debates sobre el nuevo orden político y donde viven varios de sus protagonistas. En el exilio, de viaje o recién llegados después de largas ausencias, estos políticos e intelectuales piensan –para bien o para mal– desde y para la ciudad de Lima, centro último de decisión. Lima favorece la formación de círculos e instituciones culturales, pero también establece relaciones de oposición y rechazo con estos ideólogos, interesados en conectarse a las esferas del poder. Al inicio de la República, la ex corte y ciudad-monasterio alberga una enorme población consagrada a la vida religiosa, lo que determina su ceremonial sagrado y su jerarquizada identidad tomista opuesta al ideario liberal. Lima produce los cuadros de canonistas y teólogos que usa el naciente régimen de Monteagudo, San Martín y Bolívar, quienes llegan de ciudades jóvenes sin los vicios de las cortes–convento en la base del operar político. La frustración de Monteagudo es evidente y la llama «la ciudad de la hipocresía» porque su liberalismo burgués aborta en un escenario político cortesano. Cuando quiere ofrecer una monarquía constitucional para recuperar el apoyo de sus elites, el orden republicano es adoptado como un recurso espurio pero necesario. Tiene sin embargo el Protectorado una victoria pírrica: ha lanzado a la palestra política a nuevos actores.

Entre estos tenemos a Juan Espinosa, soldado que aspira a hacer de las entradas de su diccionario republicano, decretos de gobierno. Él, José Arnaldo Márquez y Abraham Valdelomar llegan a Lima a «hacer la República», a retar al orden jerarquizado que sobrevive a través de dos soportes cuasi antagónicos: el liberalismo económico de la bonanza guanera y la República militarizada. Bien señala la autora la importancia de ese momento de esquizofrenia política en 1854, cuando el Presidente Castilla tiene que jurar una Constitución que representa el fin de las corporaciones, para abjurar de ella tres años más tarde con la bendición de su más importante operador ideológico, Bartolomé Herrera, y con el rechazo de los intelectuales que la inspiraron. La República militarizada usó a los

intelectuales y los descartó cuando ya no le sirvieron. Aun así, ellos soñaron con impactar en la lectoría, tecnicificar y masificar el fenómeno de las comunicaciones, definir políticas de Estado y difundir la novedad de la República literaria peruana en un ámbito internacional que, paradójicamente, los vio como remotos exponentes de lo exótico, como se quejaba Francisco García Calderón. Valdelomar se burló de la ciudad pacata al celebrar el baile de la Rouskaya que desacralizó el cementerio. García Calderón, en su exilio parisino primero y en su exilio interior después, le reprochará a Lima su medianía cultural; su pluma no puede contra la «Patria Nueva» de Leguía, pero ayuda a erosionarla. Esta es la genealogía del intelectual peruano contemporáneo: el periodista, el escritor y el profesor universitario. Este republicanismo cultural y esta disidencia lo preceden.

La tensión que para la República supuso la supervivencia de las corporaciones coloniales es otro eje que agrupa varios de estos ensayos. El republicanismo del siglo XIX –por su genealogía ilustrada– se relacionó mal con la herencia virreinal, a la que tildó de antimoderna. No la asimiló para su beneficio y le dio la espalda. Sin embargo, los funerales de Estado que se le hacen a Bernardo O'Higgins en Lima, Valparaíso y Santiago, ponen de relieve la manera como el republicanismo usa el ceremonial fúnebre virreinal para cohesionarse ideológicamente y relanzar un proyecto nacional. Es en la antigua corte, donde residía aún la burocracia religiosa con el *expertise* requerido, que el cuerpo de O'Higgins es transformado simbólicamente de general de la Independencia en héroe fundador del Chile moderno. Sobre la «reliquia de O'Higgins» se erige el altar en el que la ex capitania general bendijo su madurez nacional.

Pero la prueba máxima del republicanismo novecentista no será su manipulación de la Iglesia, cuanto su difícil relación con las comunidades indígenas. Esta tensión se inicia con medidas liberales como la abolición del tributo por los liberales de Cádiz y la supresión de las comunidades por Bolívar. El estatus jurídico de la corporación indígena se erosionaba sin incorporarse plenamente al orden republicano, pese a su discurso aglutinante, como señala Mc Evoy. El republicanismo acusó al indígena de ser causa del atraso material, pese a que el Estado no abolió el tributo hasta 1854, con la Constitución liberal que eliminó también otro remanente colonial, la esclavitud. Pero esa primavera liberal evidenció que el mal balanceado erario no podía descartar al tributo como ingreso fiscal. No sorprende que Manuel Pardo pidiera en la década de 1860 su restitución para dotar de responsabilidades republicanas a las comunidades indígenas, afectadas de «incuria». En varios momentos, la autora roza las contradicciones de nuestros liberales novecentistas, quienes en su lucha por el progreso quisieron crear la ciudadanía por decreto, a través del lente del liberalismo norteamericano, negando a la población rural virtudes de trabajo y moral y no defendiéndola del abuso de gamonales. Restituir el tributo por un lado y negarles a las comunidades el acceso al mercado de lana por otro, como sucedió en Puno en la década

de 1860, era un proyecto de *apartheid*. Cuando los ideólogos republicanos, influidos del social-darwinismo de la época, invocaron diferencias racializadas para justificar su desesperanza frente a la población nativa –a la que habían llamado alguna vez «nobles hijos del Sol»–, se crearon las condiciones para tragedias como la de Huancané. Porque Márquez alabó la tradición republicana norteamericana –como lo hizo Sarmiento antes, esa que privó a los indígenas norteamericanos de ciudadanía efectiva– y Pardo fomentó la inmigración europea como receta de desarrollo y calificó a los indios de «renuentes al trabajo». Bienintencionados pero ambiguos en su manejo del legado virreinal, no comprendieron los liberales que las corporaciones podían coexistir con la modernidad tecnológica, política y comercial y ser cooptadas hasta su disolución.

Paradójicamente, a veces fueron los caudillos los que entendieron la necesidad de negociar con las tradiciones representativas virreinales, como ocurrió luego del pronunciamiento de los antiguos cabildos –los pueblos «republicanos» del interior del Perú– en el contexto de la revolución liberal de 1854. Tan poderoso como el simbolismo religioso en el establecimiento de alianzas entre las masas y el Estado caudillista, fue también el reconocimiento de tradiciones políticas de larga data, como el pronunciamiento provinciano contra Echenique a favor de la agenda liberal. La jerarquización hegemónica de los cabildos fue apoyada por Castilla, pero este endose al poder regional fue entendido como continuidad de la tradición de representación virreinal, en la que el establecimiento del diálogo entre pueblo y rey contribuía al fortalecimiento del vínculo entre ambos y reforzaba la idea de justicia. Eso se esperó de la República militarizada castillista y de allí la alianza provincial con un proyecto que no favoreció la consolidación del republicanismo liberal. La relación entre el pronunciamiento de los cabildos provinciales y las estrategias populistas del caudillo militar fortaleció a este último en detrimento de los sectores progresistas.

Las mentes visionarias de nuestros republicanos novecentistas no pudieron implementar el Estado moderno, pero sí imaginarlo, y esto anunció el porvenir. La jerarquización social y los fueros corporativos virreinales tardaron en desintegrarse y colisionaron varias veces contra la prédica cívica del republicanismo, pero el viejo orden fue finalmente erosionado por el poder de ese discurso en proceso de materialización. Esa tensión tenía que producir caídos: los intelectuales sufrieron largas agonías y los políticos o nuestros compatriotas de Puno, muertes violentas. Sobre sus tumbas hemos construido nuestra historia y una vez más la autora magistralmente nos recuerda que –como quería Basadre– la República es aún una promesa.

Carlos Gálvez Peña

*Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima*